

inflexible, que puede gestar problemas insospechados.

Es más, un país dolarizado, con toda la carga de recortes en su soberanía, prevalecientes hoy día, tendría menos capacidad de reacción y de gestión. Debilitaría aún más su capacidad para fortalecer y proteger el mercado interno, a la espera que los impulsos para su desarrollo provengan cada vez más de afuera. Y aunque pueda resultar paradójico, si se arrincona las políticas orientadas a favorecer el mercado interno, disminuirá también en forma ostensible el campo para el diseño y aplicación de una concepción estratégica que permita participar en forma activa en el mercado mundial. De hecho, el complejo proceso de reacomodo de la economía que provocará la dolarización ahondará las tendencias reprimarizadoras y las presiones desindustrializadoras en el aparato productivo, vigentes desde hace largo rato y que están procesando un régimen social de acumulación acorde con la nueva división internacional del trabajo, impuesta por los intereses transnacionales al compás de la batuta de Washington.

A fin de cuentas, los cambios requeridos para impulsar el desarrollo no surgirán espontáneamente con la introducción del dólar y tampoco con esquemas de apertura y liberalización a ultranza. La dolarización, lejos de ser un piloto automático o si se quiere una restricción estimulante, equivale a un nuevo bloqueo, a la amputación voluntaria e innecesaria de un dedo de la mano, con lo cual la tarea recaería en los otros cuatro, algunos de los cuales también sufren severas limitaciones... En una economía dolarizada el desafío será mayor, pues una alternativa de política económica deberá preparar también la salida de la trampa que implica esta extrema rigidez cambiaria, cuando las condiciones lo permitan. A viejos retos habrá que ofrecer remozadas respuestas,

que sean viables en tanto beneficien a las mayorías, con la participación activa de las propias mayorías y en esquemas de mayor integración regional a nivel horizontal. Es tiempo, pues, de proponer respuestas que tengan en su mira la superación del modelo neoliberal para al menos “civilizar la bestia: el ‘capitalismo’” en palabras de Günther Grass; respuestas que ofrezcan renovadas opciones de política macroeconómica y no la repetición simplona del desgaste instrumentario neoliberal. El asunto, visto desde una perspectiva integral del desarrollo, no se reduce, entonces, a una simple resolución del tema monetario y cambiario. Dolarizar o no dolarizar, no es la cuestión.

Alberto Acosta: Ecuatoriano. Economista, graduado en la Universidad de Colonia, Alemania. Profesor universitario. Consultor internacional y del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS-FES) en Ecuador. Asesor de organizaciones indígenas y sociales. E-mail: <alacosta@hoy.net y alacosta48@yahoo.com>.

Andreas Baumer

¿Señales de esperanza en Euskadi? El País Vasco después de las elecciones autonómicas: partidos políticos, sociedad civil y perspectivas de paz

En el País Vasco se está acostumbrado a que los hechos suelen ser peores que los temores más pesimistas. El caso de las elecciones autonómicas del 13 de mayo de

2001 es la famosa excepción que confirma la regla. En contra de lo esperado por algunos sondeos, que dibujaban escenarios de catástrofes aritméticas o políticas, los resultados de las elecciones reflejan el apoyo a un nacionalismo moderado y el rechazo de opciones radicales que supongan cambios sustanciales. No se produjo un triunfo de la *Santa Alianza* de los partidos de ámbito nacional, Partido Popular (PP) y Partido Socialista de Euskadi (PSE, la Federación Vasca del Partido Socialista Obrero Español, PSOE), ni la aritmética electoral ortogó otra vez a Euskal Erritarrok (EH), el aliado político de ETA, el papel de bisagra para formar una mayoría parlamentaria. El ganador indiscutible es la coalición de los dos partidos que representan el nacionalismo moderado, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Eusko Alkartasuna (EA). El PNV, partido en el gobierno desde que existe la Comunidad Autónoma Vasca, ha consolidado su posición de partido hegemónico. Por último, una pequeña victoria, aunque bastante significativa, celebró Izquierda Unida (IU), única fuerza política que resistió a la lógica fatal del *frentismo* –partidos “constitucionalistas” versus partidos “nacionalistas”– que dominaba la campaña electoral en Euskadi.

Sin embargo, existen escasas posibilidades de que los resultados de estas elecciones justifiquen una cierta esperanza en el desarrollo de políticas que lleven a la paz. ETA ya ha mostrado a través de una serie de atentados que –una vez más– ignora el voto del electorado vasco. La sociedad vasca está más polarizada que nunca. Dependerá, por tanto, de los actores políticos y de la sociedad civil el que se consiga superar esa polarización extrema.

En este contexto tienen una importancia excepcional las consecuencias que saque –o no– la izquierda *abertzale*, es decir, el nacionalismo radical. Muy impor-

tante es también la cuestión de si el PP, y con éste también el gobierno de José María Aznar, reformula su política hacia el País Vasco, como reacción a tan decepcionantes resultados. Los socialistas del PSE tendrían que plantearse una pregunta muy similar.

Un factor clave a la hora de analizar las perspectivas de paz futuras, será la estrategia del PNV y de la nueva Ejecutiva del gobierno vasco, de nuevo bajo la dirección del anterior *lehendakari* Juan José Ibarretxe. ¿Mantendrá la moderación del discurso que caracterizó su campaña electoral o volverá a las posturas soberanistas de los últimos dos años? ¿Será capaz de formular una propuesta política que aporte un nuevo impulso para una posible solución? ¿Habrà una voluntad política de los partidos de ámbito estatal de reanudar el diálogo con el nacionalismo moderado? En segundo lugar, hay que tener en cuenta el papel de la sociedad civil. Solamente si la sociedad civil en su conjunto consigue crear un ambiente de distensión y de voluntad de diálogo podría desarrollarse una perspectiva de paz.

Desgraciadamente hay muy pocas razones para ser optimista. La última gran oportunidad para el inicio de un proceso de paz –la tregua de ETA de 1998– fue desaprovechada por todos los actores implicados en el conflicto. Obviamente la mayor responsabilidad la tienen los activistas de ETA. Fueron ellos los que reanudaron sus acciones armadas y, con ello, hicieron saltar por los aires las esperanzas de la sociedad vasca de poner fin a la violencia. Pero el hecho de que ETA pueda regresar a su estrategia del terror sin perder el apoyo de la izquierda *abertzale* –que al fin y al cabo representa una parte minoritaria pero significativa de la sociedad vasca– indica que el problema es más complejo. Por lo menos se podría suponer que si el gobierno central hubiera mostra-

do la voluntad de conseguir una solución negociada al conflicto vasco, ETA lo habría tenido mucho más difícil a la hora de legitimar la ruptura de la tregua ante sus aliados políticos.

En ese momento, entró en juego un cierto tipo de autismo político que ha marcado –y marca todavía– el debate sobre el conflicto vasco desde los tiempos de la transición. Los dos grandes partidos estatales –tanto el PP como el PSOE– niegan que, respecto del conflicto vasco, se trate de un problema “político” que reclama una solución “política”. Repiten con cierta monotonía que la lucha contra ETA tendrá una solución policial, sin preocuparse demasiado por el hecho de que la historia de los últimos veinticinco años indica todo el contrario. Esta actitud condicionó también la reacción –o mejor la falta de reacción– del gobierno central ante el anuncio de la tregua por parte de ETA. Pocas veces había tanta esperanza en Euskadi como en ese mes de septiembre de 1998. Fue por eso que el desencanto, tras la vuelta de ETA a la violencia, fue todavía más profundo. Esas esperanzas decepcionadas, junto con la polarización extrema de la sociedad y la radicalización del discurso político formaban el contexto en el cuál se desarrollaron la campaña electoral y las elecciones.

A principios del año 1998 se juntaron una serie de factores que favorecieron un cambio sustancial de la situación en el País Vasco: La izquierda *abertzale* se encontraba política y socialmente aislada como nunca antes lo había estado. Por otro lado, ETA estaba debilitada por una serie de detenciones de varios de sus comandos y dirigentes. En este contexto se pudieron imponer dentro del nacionalismo radical las fuerzas políticas que luchaban por un cambio de estrategia.

Además, tras el asesinato del concejal conservador de Ermua, Miguel Ángel

Blanco, en 1997, la sociedad civil se había convertido en un factor importante de la política vasca. Nunca antes se manifestaba tanta gente en contra de ETA. Grupos como Gesto por la Paz o Elkarri desarrollaron un protagonismo activo en un debate amplio sobre formas cívicas de superación de conflictos y sobre posibles soluciones del problema vasco.

A nivel internacional, el proceso de paz en Irlanda, que desembocó en los acuerdos de Stormont en la primavera de 1998, condicionaba una coyuntura favorable a semejantes iniciativas de paz.

En esas condiciones se empezaron una serie de negociaciones secretas entre el PNV y Herri Batasuna (el partido de la izquierda *abertzale* que se presenta actualmente en las elecciones dentro de la coalición EH) y más tarde entre el PNV y ETA. El tema de esas negociaciones fue la renuncia a la violencia por parte de ETA y el compromiso político del PNV de iniciar una política de “construcción nacional” que superara el actual marco institucional de la autonomía vasca, es decir el Estatuto de Gernika. Como resultado de las negociaciones entre el PNV y HB se propuso la creación de un foro de debate, llamado Foro de Irlanda, en referencia al proceso de paz en el Ulster. Ese foro se constituyó definitivamente el 20 de Junio de 1998 y reunió además de a PNV y HB a otros partidos y organizaciones de tendencia nacionalista, representantes de la sociedad civil, entre ellos Elkarri y los sindicatos mayoritarios en Euskadi, y –como único partido de ámbito estatal– Izquierda Unida, una federación de partidos dominada por el Partido Comunista de España. Del Foro de Irlanda surgió el Pacto de Lizarra, firmado el 12 de septiembre de 1998 por los integrantes del Foro. En el Pacto se propone un proceso de diálogo abierto y sin exclusiones y se reivindica el derecho de autodeterminación para todas las pro-

vincias vascas: “Euskal Herria debe tener la palabra y la decisión” (Declaración de Lizarra). Cuatro días después ETA anunció una tregua “indefinida e incondicional”.

Con esto se iniciaron dos procesos paralelos, que se condicionaron mutuamente. Por un lado, se daba con la tregua la condición necesaria para un proceso de paz. Por otro, con el Pacto de Lizarra existía por primera vez una opción estratégica común, por parte de los partidos de carácter nacionalista, para la creación de un proceso político abierto, que –por lo menos teóricamente– pudiera concluir en la independencia de Euskal Herria.

Las relaciones con el proceso en Irlanda son obvias. Sin embargo, en este caso la intransigencia de los actores principales, impidió que en ese contexto se desarrollase un proceso de paz similar. Para ETA, la tregua fue solamente una maniobra táctica para conseguir el compromiso del PNV respecto a la política soberanista. Aprovechó la tregua para la reconstrucción de su infraestructura y de sus comandos, alimentando así la polémica de la “tregua trampa”, que surgió muy pronto en las declaraciones políticas de los miembros del gobierno español y en los medios de comunicación. Por otro lado, para el gobierno español, el otro gran actor implicado en el proceso de paz, lo importante era la lucha en contra de la amenaza nacionalista, que surgió primero del Pacto de Lizarra y más tarde, tras las elecciones autonómicas de octubre de 1998, del primer gobierno formado exclusivamente por partidos nacionalistas (una coalición de PNV y EA, apoyado por EH). No mostró ninguna disposición de aprovechar la nueva constelación para una solución del conflicto.

ETA, por su parte, no estaba dispuesta a ceder el protagonismo a las fuerzas políticas. La organización terrorista tutelaba el proceso de la llamada “construcción

nacional”, es decir la creación de unas instituciones nacionales en todas las provincias vascas. Cuando el PNV se negó a aceptar las propuestas más fantásticas de los grupos más radicales del nacionalismo vasco, como por ejemplo la convocatoria de unas elecciones para una asamblea constituyente en todas las provincias vascas, ETA dio por fracasado el proceso iniciado en Lizarra y anunció la vuelta a la lucha armada.

Resumiendo, se puede decir que ETA no tuvo interés en un proceso de paz, sino en un proceso de “construcción nacional”, bajo su tutela y con su ritmo. El gobierno, por su parte, tampoco supo (o quiso) aprovechar esa oportunidad histórica: A pesar de un encuentro secreto de una delegación del gobierno con dos representantes de ETA en Suiza (de los cuales uno fue detenido semanas después por la policía francesa), no hubo voluntad política por parte del gobierno español de hablar de una solución negociada, que fuera más allá de la disolución de ETA a cambio de una solución tanto para los presos como para los militantes. Desde la perspectiva de un Estado de Derecho democrático esa actitud tiene su legitimidad, pero en el caso de Irlanda fue precisamente la disposición de todos los actores, incluido el gobierno británico, de negociar sobre una solución “política” del conflicto, la que facilitó el proceso de paz.

Con el fin de la tregua en diciembre de 1999, el País Vasco volvió a unos tiempos, que se consideraban ya superados. 31 personas fueron asesinadas por ETA hasta junio de 2001. Pero no son solo las bombas y los disparos los que convirtieron la vida para muchos vascos en una pesadilla. La *kale borroka*, la lucha callejera de los jóvenes radicales, ha aumentado de forma tremenda en términos de grado de organización, brutalidad y extensión. La presión por parte de la izquierda *abertzale* se diri-

ge ahora contra representantes de todos los sectores de la sociedad: académicos, intelectuales, políticos, artistas, *ertzainas* (funcionarios de la *Ertzaintza*, la policía autonómica), etc. Obviamente el nacionalismo radical ha vuelto a su estrategia formulada en la llamada Ponencia Oldartzen de 1995: bajo el lema de “socializar el sufrimiento” se formulaba en este documento un concepto de extensión de la lucha a todos los sectores de la sociedad.

Después de que la coalición de gobierno de PNV y EA rompiera con EH por la no condenación por parte de ésta de los atentados de ETA, el *lehendakari* Ibarretxe tuvo que liderar un gobierno sin mayoría parlamentaria suficiente para una gestión cómoda. Después de meses de aislamiento político casi total, anunció finalmente una nueva convocatoria de elecciones para el 13 de mayo de 2001.

A la polarización ya existente en la sociedad vasca contribuyó además la política del PP y –de forma menor– la del PSOE y del PSE. Sobre todo la campaña electoral del PP estuvo caracterizada por un reciclaje ideológico de los rasgos más centralistas de la derecha española: negó al nacionalismo moderado cualquier legitimidad y lo equiparó implícitamente con el terrorismo de ETA. Los ataques al nacionalismo vasco fueron completados por un recurso a un nacionalismo español centralista de una forma que no se escuchaba desde hacía mucho tiempo en España.

Una parte importante de los medios de comunicación participaron también en ese discurso dicotómico utilizando la terminología de partidos “constitucionalistas” (PP y PSOE/PSE) y partidos “nacionalistas” (PNV, EA, EH/HB). El objetivo declarado de PP y PSOE/PSE que se presentaron de hecho como coalición electoral fue la formación de un gobierno “constitucionalista”, es decir, sin participación de ningún partido nacionalista. Por su parte, PNV y

EA, aunque moderaron su discurso durante la campaña de forma sustancial, cerraron las filas nacionalistas.

Llama mucho la atención, que después de una campaña electoral tan polémica y polarizante, los resultados transportan un mensaje justamente opuesto. La mayoría de los vascos votaron por una opción moderada. El electorado nacionalista pasó una factura amarga a la izquierda *abertzale* por su subordinación a ETA. EH (10,1%, 1998: 17,9%) perdió casi la mitad de sus votos y la mitad de los escaños obtenidos en las últimas elecciones. La moderación del discurso soberanista y la imagen moderna y cercana de Juan José Ibarretxe convencieron a una gran parte del electorado vasco. Con el 42,7% de los votos la colación de PNV y EA celebró un triunfo histórico. El PSE (17,8%, 1998: 17,6%) repitió su resultado frustrante de 1998, mientras el PP (23%, 1998: 21,3%) subió ligeramente. Sin embargo, este resultado significa una decepción para los populares, porque esperaban, con su apuesta fuerte mediante un discurso decididamente antinacionalista un resultado parecido al 28,1% que consiguieron en Euskadi en las elecciones generales de 2000. Por su parte, Izquierda Unida (5,5%, 1998: 5,6%) podía mantener los resultados de 1998, un hecho que, teniendo en cuenta la crisis tremenda que vive esta coalición en el ámbito nacional, por sí misma ya es un triunfo. La coalición de PNV y EA tiene, con 33 de 75 escaños, una mayoría cómoda para gobernar, ya que la opción de una mayoría de la oposición en contra, aritméticamente posible, es políticamente impensable porque significaría el voto unido del PP y de EH. Para el clima político en Euskadi sería sin embargo de una importancia enorme que el *lehendakari* coopere también con las fuerzas no nacionalistas. Así se evitaría que la parte no-nacionalista del electorado vasco tenga la sensación de quedarse sin

consideración en la política del gobierno autonómico.

Dentro de la izquierda *abertzale* se levantaron después del desastre electoral una serie de voces críticas en relación con la subordinación a ETA. Pero parece que se ha vuelto a imponer una vez más el sector duro. En junio terminó un proceso de debate interno, empezado durante la tregua con el objeto de adaptar HB a los nuevos tiempos. Las voces de los sectores críticos con la lucha armada, impulsores de este proceso, fueron marginadas en su mayoría. En este sentido, en el congreso de refundación, donde se creó la nueva formación “Batasuna” (unidad), se aprobó, tras un intenso debate sobre la lucha armada, una ponencia que sanciona que “todas las clases de lucha son necesarias para construir Euskal Herria” (*El País*, 24 de junio de 2001).

Los resultados de estas elecciones reflejan tanto el rechazo al radicalismo *abertzale* como al intento de deslegitimación del nacionalismo vasco en su totalidad. Eso es un buen punto de partida para una nueva etapa política en un país, donde conviven nacionalistas y no-nacionalistas, gente de sentir y habla española y gente de sentir y –no siempre– de habla vasca. Pero para superar la situación actual de violencia y de polarización que vive Euskadi se necesita más: una voluntad y una capacidad de diálogo en todos los ámbitos, el político y el social. Sería imprescindible una sociedad civil –entendida como el conjunto de asociaciones y grupos que están ubicados en el espacio social entre el mundo privado y las instituciones políticas: sindicatos, movimientos sociales, asociaciones cívicas etc.– que supere la profunda polarización existente mediante un reconocimiento positivo de la realidad multicultural y plural de Euskadi. Un discurso público sobre los problemas y posibilidades verdaderamente interesantes e importantes, en un ambiente de diálogo,

distensión y capacidad de manejar conflictos de una forma cívica, sería la aportación fundamental de la sociedad civil a la solución del conflicto vasco. Necesariamente, esta aportación no puede ser más que un complemento de la iniciativa política, que tiene actualmente el deber de proponer nuevas formas de superar el conflicto, basadas igualmente en los principios de diálogo, distensión y respeto a la pluralidad existente en la sociedad vasca. Pero la condición clave y fundamental para toda solución del conflicto vasco es que ETA por una vez asuma los principios básicos de cualquier sociedad civilizada: el respeto a la vida y la renuncia a la violencia.

Andreas Baumer es colaborador científico en el Instituto de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Rostock. Entre sus áreas de investigación se encuentran los sistemas políticos de España y Portugal y los conflictos nacionalistas y étnicos.

Iván Orozco Abad

Glosas sobre la Conferencia de Nôtre Dame: democracia, derechos humanos y paz en Colombia

Entre los días 26 y 27 de marzo de 2001 tuvo lugar en la Universidad de Notre Dame (Indiana) un seminario sobre “Democracia, Derechos Humanos y Paz en Colombia”. El evento fue organizado y apadrinado por el Kellogg Institute for International Studies y por la Comisión Colombiana de Juristas. La discusión de dos días se dividió en cuatro paneles sobre